

No Sólo AN Lamenta la Muerte de Clouthier

Exclusión Política, Otro Fantasma

- ★ ¿Por qué no Empezar a Construir un Nuevo Sistema?
- ★ Líderes Corporativos Nada Tienen ya Para Negociar
- ★ En la IP se Confía Para Salir del Estancamiento

LORENZO MEYER

No es indispensable compartir el conjunto de los valores representados por don Manuel J. Clouthier, para reconocer que con su inesperada muerte, la difícil lucha por hacer de la mexicana una sociedad democrática, ha perdido a uno de sus líderes más reconocidos. La desaparición del ingeniero Clouthier es lamentada más allá de las fronteras del PAN; lo es, o debería serlo, por todos los mexicanos comprometidos con la búsqueda de un desarrollo democrático como la vía insustituible para lograr la dignidad individual y colectiva que por tanto tiempo nos ha sido negada.

Y ahondando en el tema de la democracia mexicana, o más bien en uno de los obstáculos para alcanzarla, resulta que entre los varios fantasmas que hoy recorren a México entremezclados con las esperanzas y las ilusiones sobre un porvenir mejor, hay uno que, de materializarse y arraigar, nos conduciría no al futuro plural y moderno que se nos tiene prometido, sino a otro bastante diferente. Este fantasma es el de hacer de la política un ejercicio de exclusión.

En todos los países latinoamericanos, uno de los grandes momentos de su proceso histórico es aquel en que a principios de este siglo las estructuras oligárquicas se abrieron —por las buenas o las malas— para incorporar a la vida política a las masas, ya fuesen éstas campesinas o urbanas. Por igual razón, una de las grandes tragedias de nuestra región, fue el intento posterior de excluir a esas masas de la política mediante el establecimiento por la fuerza de regímenes autoritarios y burocráticos.

★

Fue justamente en México donde América Latina vivió uno de los procesos de incorporación más dramáticos, pues fue la Revolución de 1910-1920 la que puso el problema de las masas en el centro de la escena política. En efecto, para 1914 el régimen oligárquico quedó en ruinas tras la rendición incondicional del ejército federal en los términos especificados en los tratados de Teoloyucan. Sin embargo, el triunfo de los constitucionalistas y sus ejércitos populares no institucionalizó automáticamente la incorporación de las masas al proceso político nacional. En realidad, para que ello ocurriera habrían de pasar veinte años de luchas internas entre los vencedores.

Para entender la tardanza entre el triunfo revolucionario y el desarrollo de una política de masas, se debe partir de un hecho evidente: los victoriosos líderes revolucionarios norteros tuvieron muchas reservas frente a los grupos populares que ellos mismos habían movilizado para usarlos como el ariete que derribó las puertas de la fortaleza oligárquica. El "tigre desatado" al que se refirió don Porfirio camino a su exilio en 1911 —las masas populares levantadas en armas—, eran una fuerza social a la que Carranza o los caudillos sonorenses nunca le consideraron realmente con la capacidad de poder actuar con responsabilidad en relación a sus propios intereses y, sobre todo, en relación a los intereses de las clases propietarias. Desde esa perspectiva —y para posar el momento de la verdadera reforma revolucionaria—, los nuevos gobernantes propusie-

ron que era menester educar primero a las clases subordinadas para luego poder aceptarlas como actores políticos responsables. El cardenismo, sin embargo, decidió cambiar la perspectiva: para educar realmente a esas masas, había que organizarlas desde arriba, incorporarlas aunque fuera de manera subordinada al nuevo sistema de poder, modificar en su favor la distribución de la riqueza nacional y, finalmente, esperar a que este proceso de democracia social desembocara, con el correr del tiempo, en la democracia política.

Desde la perspectiva del general Cárdenas y los suyos, las masas mexicanas sojuzgadas por siglos no podían, aunque se deseara, comportarse de entrada

como ciudadanos modernos y democráticos. De ahí que el cardenismo diera forma a un régimen que era incluyente de las masas en lo que respecta a los beneficios materiales, pero no necesariamente democrático por lo que se refería a la toma de las decisiones.

La situación resultante, todos lo sabemos, nunca desemborco en esa sociedad solidaria y democrática que propuso el cardenismo, sino en otra, caracterizada por un capitalismo subdesarrollado metido en un marco formalmente democrático pero autoritario en la práctica. Sin embargo, algo había cambiado realmente respecto del pasado prerrevolucionario: la maquinaria política mexicana basada en una presidencia fuerte y en un partido de Estado de naturaleza corporativa, mantuvo una clara vocación por incluir a todas las fuerzas sociales capaces de tener alguna significación política.

★

En ese sistema post-revolucionario que llegó a su madurez en la segunda mitad del siglo, las decisiones políticas básicas eran tomadas por el presidente, pero dentro de un complicado proceso de negociación interna que servía para limar las inevitables contradicciones entre clases y grupos antagónicos. En ese proceso, tenían hasta hace poco un papel importante —vital— los líderes de las organizaciones gremiales y sindicales, los representantes de las

organizaciones empresariales y los grandes capitanes de industria", que en sí mismos eran instituciones —Legorreta, Vallina o Espinoza Yglesias, por ejemplo—, los gobernadores de los estados y algunos caciques regionales. En fin, gobernar en el México anterior a la crisis de 1982 era el arte —y la voluntad— de equilibrar la heterogeneidad que servía de base al régimen.

A partir de la crisis de 1982 todo empezó a cambiar. Para poder resistir el choque que produjo el estancamiento brusco de la economía, el presidente Miguel de la Madrid se rodeó de un grupo de colaboradores muy similares a él y entre sí, se encerró en ese estrecho círculo y ahí tomó las decisiones básicas de su sexenio. El objetivo gubernamental ya no fue equilibrar intereses, mantener el viejo consenso, sino simplemente sobrevivir mientras surgía un nuevo modelo de desarrollo. La carga de la crisis —el costo de cambiar la estrategia de desarrollo— se echó sobre los hombros de unos grupos más que sobre los de otros —más sobre los de los asalariados y los marginados y menos sobre los del capital— y ya no fue posible ni conveniente escuchar a todos ni buscar la variedad dentro de los altos círculos del poder. Se inició, por tanto, el proceso de exclusión.

Hoy, tras el cambio sexenal, ese proceso se ha ahondado. Para el observador más despiadado es claro que en la actualidad los líderes de las organizaciones corporativas en las que se asienta el partido del Estado ya no tienen casi nada sustantivo que negociar con la presidencia. El partido mismo se está convirtiendo en una gran cáscara, sin contenido, que gana las elecciones por inercia o lo que es peor, por obra y gracia del fraude. Es más, ni siquiera ser secretario de Estado asegura ya acceso e influencia en la toma de las decisiones. En el gabinete actual, sólo su poderoso coordinador y un puñado de secretarios —media docena, quizá menos— parecen tener influencia real en la formulación de las grandes líneas macro-políticas, el resto parecieran ser meros administradores.

El sector empresarial nacional puede dar la apariencia de estar, y sentirse, menos excluido de las decisiones políticas fundamentales que el resto de la sociedad; ello se debe a que se le ha asignado el papel de la gran palanca que deberá sacar a la economía mexicana del estancamiento. Sin embargo, no es seguro que realmente ese gran capital sea ya un contribuyente independiente y decisivo en el diseño de la gran política. Seguramente lo será en el futuro, pero no en la actualidad.

El Poder Legislativo es ahora mucho más plural que en el pasado, pero en la medida en que la mayoría de sus miembros siguen controlados por el PRI y la tradicional subordinación de ese partido al presidente se mantiene inmovible, el jefe del Ejecutivo sólo tiene que molestarse en pensar en el Congreso como parte del proceso de la toma de decisiones cuando es necesario modificar la Constitución, pero nada más. Finalmente, están los partidos de oposición como actores políticos que representan de manera imperfecta la pluralidad. Para mantenerlos lejos de la acción política oficial, el gobierno ha diseñado la llamada "democracia selectiva", que como sabemos, consiste en reconocer algunos de los triunfos y avances parciales de los partidos menos intrusivos y distantes del proyecto oficial, en tanto que se bloquean con todos los medios al alcance del gobierno a los partidos más recalcitrantes y cuya oposición es más radical.

No hace mucho, un estudio del fenómeno político mexicano de la post-revolución señalaba que en el caso del nuestro, y a diferencia de lo que había ocurrido con los otros autoritarismos latinoamericanos, existía una red compleja y en expansión, de canales institucionales para procesar de manera más o menos pacífica las múltiples y constantes contradicciones y conflictos sociales. Todos, o casi todos, los grupos sociales con problemas —colonos, trabajadores, empresarios grandes o chicos, ejidatarios, burócratas, terratenientes, profesionistas indígenas, etcétera— sabían dónde y

cómo introducir sus demandas en la complicada y corrupta, pero finalmente muy porosa, maquinaria política de un sistema autoritario pero innegablemente incluyente.

La aseveración anterior ya no parece hoy tan cierta. Así está como el ejemplo más reciente y dramático del viraje hacia la exclusión, el problema de Cananea. La cúspide el poder tomó por sí y ante sí la decisión de cerrar temporalmente la histórica mina cuprífera para reestructurarla según los cánones del neoliberalismo imperante, sin considerar ni deseable ni necesario, tratar de negociar antes con los afectados. A ellos simplemente se les notificó la decisión del "supremo gobierno" usando a un mensajero muy persuasivo: el ejército.

Piénsese lo que se piense sobre el proyecto económico del actual gobierno, no se puede negar que el contenido y, sobre todo, la forma de lo hecho en Cananea no se parece mucho a la forma tradicional de procesar el conflicto en México, y si se asemeja mucho, demasiado, a las que tienen lugar en los sistemas autoritarios excluyentes, de los que hubo y aún hay, tristes ejemplos al sur de nuestro continente.

Es cierto que la forma antigua de hacer política ya no es viable porque falló el sistema económico sobre el que se había montado. Bien, pero la respuesta al fracaso del autorita-

rismo incluyente no debería ser simplemente el autoritarismo excluyente, sino otra que sea, a la vez, legítima, moderna y viable.

Según las últimas encuestas de opinión que se han publicado en algunos diarios, en particular la aparecida en EXCELSIOR la semana pasada, la popularidad del Presidente es sorprendentemente alta. Bien, de ser ese el caso, entonces ello quiere decir que hay un gran apoyo social para sus políticas económicas y de toda índole. Así las cosas, ¿por qué insistir entonces en premodernidades e involuciones políticas en vez de lanzarse de lleno a la construcción de un nuevo sistema político incluyente? ¿uno que elimine el fraude electoral y haga de las urnas el instrumento que sustituya, superándola, a la incorporación corporativa del pasado que ahora, se dice, ya es inconveniente? ¿Por qué no intentar incluir a las masas al sistema político, pero no ya como masas, sino como ciudadanos y por medio de un verdadero sistema de partidos moderno y totalmente legítimo? La reforma de la ley electoral podría ser un buen paso en ese sentido. Ojalá no se desperdicie la oportunidad, pues como quedó demostrado por la trágica experiencia sudamericana reciente, la política de exclusión, elaborada por un puñado de sabios tecnócratas, puede ser muy eficaz a la corta, pero puede resultar catastrófica a la larga.